

## **9 de cada 10 usuarios creen que el Gobierno sólo se preocupa por los intereses de la industria cultural**

Nueve de cada diez consumidores creen que el Gobierno de España sólo está preocupado por los intereses de la industria cultural y no atiende los del conjunto de ciudadanos.

Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción sobre las medidas del Gobierno, en el ámbito de su política cultural, para regular los derechos de autores, editores y usuarios.

En la encuesta, efectuada entre el 24 y el 28 de febrero, han participado 2.957 usuarios.

Sólo el 8% de los encuestados considera que el Gobierno está preocupado por igual por los derechos e intereses de los consumidores y los de la industria cultural. El 91% valora que de las actuaciones del Ejecutivo se deduce que su única prioridad son los intereses de la industria y un 1% cree que sólo se centra en los de los usuarios.

Asimismo, el 97% de los usuarios está en contra del canon digital. El 41% de los encuestados cree que sólo sería justo si se aplicase a las obras originales y no a soportes de almacenamiento vírgenes y el 56% opina que es totalmente injusto y no debería aplicarse a ningún tipo de soporte. Tan sólo el 3% lo cree justo tal y como está concebido en la actualidad.

En cuanto al mecanismo de cierre de páginas web de enlaces que recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el 82% considera que con esta medida se vulnerarían derechos fundamentales, dándose más valor a los derechos de la industria cultural.

El porcentaje de usuarios que se muestra de acuerdo con la medida al opinar que podrá proteger los derechos de los autores y editores que con la normativa actual se encuentran desprotegidos se reduce al 3%. Por su parte, el 15% de encuestados no opina al indicar que no conoce el alcance de la medida.

Por otro lado, sólo el 20% de los usuarios cree que adquirir copias pirateadas es una inmoralidad. El concepto piratería, eso sí, no es el mismo para todos los usuarios, ya que unos lo asocian a la compra de copias ilegales y otros también al intercambio o descarga de obras sin ánimo de lucro, asimilando el discurso de la industria y el Gobierno.

La existencia de consecuencias legales sólo frenaría la compra de copias piratas o el intercambio de archivos para el 31% de los encuestados. El 49% no dejaría de hacerlo y el 21% no se posiciona sobre esta cuestión.

Un precio asequible movería al 67% de los usuarios a comprar una obra original antes que una copia. La existencia de una mejor calidad en la versión original también llevaría a comprarla al 60% de los encuestados.

Asimismo, el 62% de los usuarios se queja de que faltan instituciones públicas donde puedan consultarse o tomarse prestadas obras culturales.